



Asamblea General

Distr. general
22 de mayo de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87º período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020

Opinión núm. 10/2020, relativa a Aleksandr Solovyev, Vladimir Kulyasov, Denis Timoshin, Andrey Magliv, Valeriy Shalev, Ruslan Korolev, Viktor Malkov, Yevgeniy Dechko, Vyacheslav Osipov, Valeriy Rogozin, Igor Egozaryan, Sergey Melnik, Valentina Vladimirova, Tatyana Galkevich, Tatyana Shamsheva, Olga Silayeva, Aleksandr Bondarchuk y Sergey Yavushkin (Federación de Rusia)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 3 de enero de 2020 al Gobierno de la Federación de Rusia una comunicación relativa a Aleksandr Solovyev, Vladimir Kulyasov, Denis Timoshin, Andrey Magliv, Valeriy Shalev, Ruslan Korolev, Viktor Malkov, Yevgeniy Dechko, Vyacheslav Osipov, Valeriy Rogozin, Igor Egozaryan, Sergey Melnik, Valentina Vladimirova, Tatyana Galkevich, Tatyana Shamsheva, Olga Silayeva, Aleksandr Bondarchuk y Sergey Yavushkin. El Gobierno respondió con retraso el 20 de abril de 2020. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);



c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. La fuente presenta el caso de 18 nacionales de la Federación de Rusia que son testigos de Jehová. Al parecer, todos ellos fueron detenidos en aplicación del artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal de la Federación de Rusia (participación en actividades de una “organización extremista”), reclusos y mantenidos en prisión preventiva o arresto domiciliario por practicar su fe de manera pacífica.

a) Contexto

5. La fuente indica que el 20 de abril de 2017 el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia ordenó la disolución del Centro Administrativo nacional de los testigos de Jehová y de las 395 organizaciones religiosas locales de esa misma confesión en el país por considerarlas organizaciones extremistas (en lo sucesivo, “la decisión de disolución”). Dicha decisión fue confirmada el 17 de julio de 2017 por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo¹.

6. La fuente añade que el 25 de septiembre de 2019 el Comité de Ministros del Consejo de Europa reiteró su grave preocupación por la prohibición general impuesta a los testigos de Jehová mediante la decisión de disolución dictada el 20 de abril de 2017 por el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. El Comité de Ministros observó con inquietud que, a consecuencia de esa prohibición, los testigos de Jehová estaban siendo detenidos, procesados y condenados por el mero hecho de participar en servicios religiosos pacíficos y hacer donaciones. Por ello, instó con insistencia a las autoridades a que adoptaran sin dilación todas las medidas necesarias para que los testigos de Jehová pudieran ejercer sin trabas su derecho individual a la libertad de religión².

7. La fuente indica además que, a fecha de 13 de diciembre de 2019, al menos 297 testigos de Jehová habían sido acusados en toda la Federación de Rusia en aplicación de los artículos 282.2 (participación en actividades de una “organización extremista”) o 282.3 (financiación de actividades de una organización extremista) del Código Penal por practicar pacíficamente su fe. Según la fuente, se ha decretado prisión preventiva o arresto domiciliario para, al menos, 126 de esas personas, entre ellas 16 mujeres. La fuente añade que más de 740 domicilios de testigos de Jehová han sido objeto de registros policiales, algunos al parecer muy violentos. Desde la decisión de disolución dictada por el Tribunal Supremo, 18 testigos de Jehová han sido procesados y condenados en aplicación del artículo 282.2 del Código Penal.

¹ La fuente se remite a A/HRC/WGAD/2019/11, párrs. 5 y 6.

² Véase https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168097d39a.

i) Aleksandr Solovyev

8. Aleksandr Solovyev, nacido en 1970, fue detenido en Perm (Federación de Rusia). Según la fuente, el 22 de mayo de 2018 el Departamento de Instrucción de Perm inició actuaciones penales contra el Sr. Solovyev y otros testigos de Jehová “no identificados” en aplicación del artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal. El instructor adujo que, del 17 de julio de 2017 al 22 de mayo de 2018, testigos de Jehová de Perm, y entre ellos más concretamente el Sr. Solovyev, se habían dedicado de manera deliberada a promover los objetivos de esa confesión, a saber, practicar y difundir su fe, entre otras cosas mediante la predicación y la distribución de folletos en lugares públicos y domicilios. Con ello, habían promovido presuntamente las actividades de una organización prohibida y participado directamente en actividades realizadas por miembros de los testigos de Jehová, a la vez que habían llevado a cabo otras acciones dirigidas a la celebración de esos actos y la participación en ellos.

9. La fuente informa de que, también el 22 de mayo de 2018, el Sr. Solovyev y su esposa regresaban de un largo viaje fuera de la Federación de Rusia cuando, al llegar a la estación de tren de Perm, aproximadamente a las 21.30 horas, él fue inmediatamente detenido por la policía y privado de libertad. Al parecer, para llevar a cabo la detención se personaron en la estación más de 20 agentes. El Sr. Solovyev fue esposado a la vista de todo el mundo y llevado en contra de su voluntad hasta un coche de policía que estaba esperando. A continuación, fue al parecer conducido por agentes armados hasta el Departamento de Instrucción de Perm mientras su esposa era llevada al domicilio familiar, que fue registrado. Según se informa, la policía se incautó de biblias, publicaciones religiosas, fotografías, cuadernos, computadoras, teléfonos móviles, tabletas y otros objetos personales del matrimonio.

10. La fuente afirma que el Sr. Solovyev fue interrogado en el Departamento de Instrucción y a continuación recluido en un centro de detención temporal. Se le tomaron las huellas digitales y se le practicó un registro personal. El 23 de mayo de 2018 a las 2.30 horas fue llevado a un centro de detención temporal, donde permaneció en detención policial hasta aproximadamente las 17.00 horas del 24 de mayo de 2018.

11. La fuente indica que, aproximadamente a las 11.00 horas del 24 de mayo, el Sr. Solovyev fue conducido del centro de detención temporal a una celda situada en el sótano del Tribunal de Distrito de Sverdlovskiy de la ciudad de Perm. El instructor del caso solicitó que se dictara prisión preventiva contra el Sr. Solovyev, pero el Tribunal desestimó la petición por considerar que los argumentos del instructor “no eran concluyentes”. Aun así, según indica la fuente, el Tribunal, por iniciativa propia y sin remitirse a ninguna prueba que proporcionara indicios razonables de que el Sr. Solovyev hubiera cometido un delito o hiciera pensar que el arresto domiciliario fuera necesario, determinó su arresto domiciliario, en condiciones estrictas, durante dos meses por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal. Según la fuente, el Tribunal justificó la medida como un medio para evitar que el Sr. Solovyev se fugara o interfiriera en la investigación.

12. La fuente añade que el arresto domiciliario del Sr. Solovyev fue prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas el 17 de septiembre de 2018, cuando el Tribunal de Distrito de Sverdlovskiy accedió a la solicitud del instructor de prorrogarlo hasta el 22 de noviembre de 2018. El 19 de noviembre de 2018, dicho Tribunal decidió cambiar esa medida cautelar por una prohibición de que el Sr. Solovyev participara en determinadas actividades.

13. La fuente indica que el 4 de julio de 2019 el Tribunal de Distrito de Ordzhonikidzevskiy de la ciudad de Perm declaró al Sr. Solovyev culpable en aplicación del artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal y le impuso una multa de 300.000 rublos. Según la fuente, el Tribunal concluyó que el Sr. Solovyev era culpable de extremismo por haber instado a dos personas a seguir asistiendo a reuniones de los testigos de Jehová y a leer publicaciones religiosas para fortalecer su fe, así como por haber alentado a otros testigos de Jehová a proseguir con sus actividades religiosas, si bien en secreto a fin de no ser detenidos. La fuente indica además que, a pesar de ello, el Tribunal aceptó que el Sr. Solovyev nunca había participado en actos violentos ni incitado a su comisión, y que era

una persona amable, responsable, honesta, educada, competente, escrupulosa y no conflictiva, además de un trabajador capaz. Según se informa, el 5 de septiembre de 2019 el Tribunal Territorial de Perm desestimó el recurso del Sr. Solovyev y confirmó la decisión del Tribunal de Distrito, que ya es definitiva y tiene fuerza de cosa juzgada.

ii) Vladimir Kulyasov, Denis Timoshin y Andrey Magliv

14. La fuente indica que, el 15 de julio de 2018, Vladimir Kulyasov (nacido en 1974), Denis Timoshin (nacido en 1980) y Andrey Magliv (nacido en 1984) fueron detenidos en la ciudad de Penza.

15. Según informa la fuente, en el caso del Sr. Kulyasov, 18 agentes de policía fuertemente armados irrumpieron en su domicilio, donde se encontraban él y su familia, y lo sometieron, al parecer, a un humillante registro corporal. En cuanto al Sr. Timoshin, la fuente indica que 15 agentes de policía, algunos de ellos, según se informa, fuertemente armados, registraron su casa, en la que se encontraban él y su familia. En cuanto al Sr. Magliv, 7 policías, al parecer fuertemente armados, se presentaron en su domicilio, en el que se encontraban él, un familiar y cuatro invitados. En los tres registros, según se informa, la policía se incautó de biblias y otros objetos personales.

16. La fuente indica que, también el 15 de julio de 2018, los Sres. Kulyasov, Timoshin y Magliv fueron interrogados en el Departamento de Instrucción Interdistrital de Bessonovskiy y luego detenidos en un centro temporal hasta el 17 de julio de 2018.

17. Según la fuente, el 17 de julio de 2018 el Tribunal de Distrito de Pervomayskiy, en Penza, estimó la petición del instructor y ordenó el arresto domiciliario de los Sres. Kulyasov, Timoshin y Magliv por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal. Según se informa, el Tribunal justificó la presunción argumentando que los tres habían sido testigos de Jehová durante mucho tiempo, tenían cierta autoridad religiosa, habían cedido su domicilio para la celebración de reuniones secretas de los testigos de Jehová y habían recaudado fondos de los participantes para las actividades religiosas de estos. Según se informa, la única razón aducida por el Tribunal para justificar el arresto domiciliario fue la necesidad de impedir que los tres hombres se fugaran o interfirieran en la instrucción.

18. La fuente afirma que, posteriormente, el Tribunal de Distrito de Pervomayskiy estimó las sucesivas solicitudes presentadas por el instructor para que se prorrogara el arresto domiciliario en los tres casos, que en total se prolongó más de 17 meses, hasta el 1 de enero de 2020. Según la fuente, todos los recursos interpuestos por los Sres. Kulyasov, Timoshin y Magliv contra esas prórrogas fueron desestimados de forma sumaria.

19. La fuente añade que, el 13 de diciembre de 2019, el Tribunal de Distrito de Leninskiy, en Penza, declaró culpables a los Sres. Kulyasov, Timoshin y Magliv, los condenó a dos años de prisión con libertad condicional y les levantó el arresto domiciliario.

iii) Valeriy Shalev, Ruslan Korolev, Viktor Malkov y Yevgeniy Dechko

20. La fuente informa de que el 25 de abril de 2019 decenas de agentes de policía fuertemente armados registraron simultáneamente los domicilios de tres testigos de Jehová en Smolensk y se incautaron de biblias y otros objetos personales. Según la fuente, al término de esos registros, Valeriy Shalev (nacido en 1977), Ruslan Korolev (nacido en 1982) y Viktor Malkov (nacido en 1959) fueron interrogados en el Departamento de Instrucción de Smolensk y luego llevados a un centro de detención temporal. Al parecer, el 26 de abril de 2019 el Tribunal de Distrito de Leninskiy, en Smolensk, decretó la prisión preventiva por un período de dos meses para los Sres. Shalev, Korolev y Malkov por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal.

21. La fuente afirma que, el 29 de abril de 2019, Yevgeniy Dechko (nacido en 1989) también fue detenido y llevado al Departamento de Instrucción de Smolensk para ser interrogado, tras lo cual fue trasladado a un centro de detención temporal. El 1 de mayo de 2019 el Tribunal de Distrito de Leninskiy decretó su prisión preventiva por un período de dos meses por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal.

22. La fuente indica que en ninguno de los casos se remitió el Tribunal a prueba alguna que justificara la presunta comisión del delito por esos cuatro hombres, y que se limitó a afirmar que habían participado en las actividades de los testigos de Jehová en Smolensk. Al parecer, para justificar la decisión de decretar la prisión preventiva, el Tribunal no adujo más razón que la necesidad de impedir que se fugaran o interfirieran en la instrucción.

23. Según la fuente, posteriormente, el Tribunal de Distrito de Leninskiy estimó las sucesivas solicitudes presentadas por el instructor para que se prorrogara la prisión preventiva de los cuatro hombres, que siguen privados de libertad en las siguientes condiciones:

a) El 14 de agosto de 2019 el Tribunal cambió la medida cautelar impuesta al Sr. Korolev por la de arresto domiciliario, situación en la que sigue actualmente;

b) El 22 de noviembre de 2019 el Tribunal cambió la medida cautelar impuesta al Sr. Dechko por la de arresto domiciliario, situación en la que sigue actualmente;

c) Los Sres. Shalev y Malkov siguen en prisión preventiva.

24. La fuente indica, además, que todos los recursos interpuestos por los Sres. Shalev, Korolev, Malkov y Dechko contra las decisiones de prorrogar la prisión preventiva o el arresto domiciliario han sido desestimados de forma sumaria. Actualmente sigue pendiente la celebración de los juicios respectivos.

iv) Vyacheslav Osipov, Valeriy Rogozin, Igor Egozaryan y Sergey Melnik

25. La fuente informa de que, el 16 de mayo de 2019, decenas de agentes de policía fuertemente armados registraron simultáneamente los domicilios de siete testigos de Jehová en Smolensk y se incautaron de biblias y otros objetos personales. Al término de esos registros, Viacheslav Osipov (nacido en 1970), Valeriy Rogozin (nacido en 1962), Igor Egozaryan (nacido en 1965) y Sergey Melnik (nacido en 1972) fueron, al parecer, interrogados en el Departamento de Instrucción de Volgograd y luego trasladados a un centro de detención temporal.

26. La fuente añade que, el 18 de mayo de 2019, el Tribunal de Distrito de Tsentralnyy, en Volgogrado, decretó la prisión preventiva por un período de dos meses de los Sres. Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal. Según parece, en ninguna de los casos el Tribunal se remitió a prueba alguna que justificara la presunta comisión de un delito por estos hombres, sino que se limitó a afirmar que eran dirigentes de los testigos de Jehová en Volgograd. La única razón que adujo el Tribunal para decretar la prisión preventiva fue la necesidad de impedir que se fugaran o interfirieran en la instrucción.

27. La fuente indica que, posteriormente, el Tribunal de Distrito de Tsentralnyy estimó las sucesivas solicitudes presentadas por el instructor para que se prorrogara la prisión preventiva de los cuatro hombres. Según la fuente, todos ellos siguen en prisión preventiva, y todos los recursos que han interpuesto han sido desestimados de forma sumaria. Actualmente sigue pendiente la celebración de los juicios respectivos.

v) Valentina Vladimirova y Tatyana Galkevich

28. La fuente informa de que, el 16 de mayo de 2019, agentes de policía fuertemente armados registraron simultáneamente el domicilio de Valentina Vladimirova (nacida en 1956) y el de Tatyana Galkevich (nacida en 1959) en Smolensk y se incautaron de biblias y otros objetos personales. Ambas mujeres fueron llevadas al Departamento de Instrucción de Smolensk, donde al parecer fueron interrogadas, tras lo cual fueron trasladadas a un centro de detención temporal.

29. La fuente indica que, el 18 de mayo de 2019, el Tribunal de Distrito de Leninskiy decretó la prisión preventiva por un período de dos meses de las Sras. Vladimirova y Galkevich por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal. Según se informa, el Tribunal afirmó, como justificación, que las dos mujeres habían cometido un delito al mantener conversaciones de contenido religioso entre ellas y con sus correligionarios, en las que habían alabado a Jehová (Dios), rezado y

hablado sobre la celebración de reuniones religiosas. Según la fuente, la única razón que adujo el Tribunal para decretar la prisión preventiva fue la necesidad de impedir que se fugaran o interfirieran en la instrucción.

30. La fuente añade que, posteriormente, el Tribunal de Distrito de Leninskiy estimó las sucesivas solicitudes presentadas por el instructor para que se prorrogara la prisión preventiva de las dos mujeres. Los días 21 y 22 de noviembre de 2019 ese mismo Tribunal decidió sustituir dicha medida cautelar por la de arresto domiciliario. Al parecer, todos los recursos interpuestos por las Sras. Vladimirova y Galkevich contra su prisión preventiva y sus sucesivas prórrogas fueron desestimados de forma sumaria. Actualmente sigue pendiente la celebración de los juicios respectivos.

vi) Tatyana Shamsheva y Olga Silayeva

31. La fuente comunica que, el 11 de junio de 2019, decenas de agentes de policía fuertemente armados registraron simultáneamente el domicilio de 22 testigos de Jehová en la región de Briansk, en las ciudades de Unecha y Novozybkov y en las aldeas de Klimovo y Dobrik, entre ellos el de Tatyana Shamsheva (nacida en 1977) y el de Olga Silayeva (nacida en 1988). Según se informa, en los registros la policía se incautó de biblias y otros artículos personales de las personas que vivían en esos 22 domicilios. Las Sras. Shamsheva y Silayeva fueron llevadas al Departamento de Instrucción de Novozybkov, donde al parecer fueron interrogadas, tras lo cual fueron trasladadas a un centro de detención temporal.

32. La fuente indica que, el 13 de junio de 2019, el Tribunal Municipal de Novozybkov, en la región de Briansk, decretó la prisión preventiva de las Sras. Shamsheva y Silayeva por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal. Según parece, el Tribunal afirmó, como justificación, que las dos mujeres habían cometido un delito al seguir difundiendo la ideología y las publicaciones de los testigos de Jehová entre los residentes e incorporando a otras personas a su actividad religiosa. Según la fuente, la única razón que adujo el Tribunal para decretar la prisión preventiva fue la necesidad de impedir que se fugaran o interfirieran en la instrucción.

33. La fuente indica que, posteriormente, el Tribunal Municipal de Novozybkov estimó las sucesivas solicitudes presentadas por el instructor para que se prorrogara la prisión preventiva de las dos mujeres. Según se informa, durante las actuaciones ante el juez se mantuvo a ambas encerradas en jaulas metálicas, un trato que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado degradante³. Al parecer, todos los recursos que interpusieron contra su prisión preventiva y sus sucesivas prórrogas fueron desestimados de forma sumaria. Actualmente sigue pendiente la celebración de los juicios respectivos.

vii) Aleksandr Bondarchuk y Sergey Yavushkin

34. La fuente informa de que el 22 de julio de 2019 agentes de policía fuertemente armados registraron simultáneamente el domicilio de Aleksandr Bondarchuk (nacido en 1974) y el de Sergey Yavushkin (nacido en 1960) y se incautaron de biblias y otros objetos personales. Los dos hombres fueron interrogados en el Departamento de Instrucción de Kemerovo y luego trasladados a un centro de detención temporal.

35. La fuente informa de que, el 24 de julio de 2019, el Tribunal Regional de Kemerovo decretó el arresto domiciliario de ambos hombres por un período de dos meses por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 282.2, párrafo 2, del Código Penal. Al parecer, el Tribunal afirmó como justificación que los Sres. Bondarchuk y Yavushkin habían cometido un delito al participar en servicios religiosos en Kemerovo y proseguir su actividad religiosa como testigos de Jehová. Según la fuente, la única razón que adujo el Tribunal para decretar la prisión preventiva fue la necesidad de impedir que se fugaran o interfirieran en la instrucción. Posteriormente, el Tribunal Regional de Kemerovo estimó las sucesivas solicitudes presentadas por el instructor para que se prorrogara el arresto

³ La fuente se remite a *Maria Alekhina y otros c. Rusia*, demanda núm. 38004/12, 17 de julio de 2018, párr. 142; y *Svinarenko y Slyadnev c. Rusia* [GS], demandas núms. 32541/08 y 43441/08, 17 de julio de 2014, párrs. 135 a 138.

domiciliario de los dos hombres. Según se informa, ambos llevan casi cinco meses en arresto domiciliario y sigue pendiente la celebración de los juicios respectivos.

b) Análisis de las presuntas vulneraciones

i) Vulneraciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

36. La fuente sostiene que las 18 personas a que se refiere la presente comunicación fueron objeto de detención y privación de libertad arbitrarias durante el período que pasaron en detención policial o en un centro de detención temporal, así como durante el período en que estuvieron en prisión preventiva o arresto domiciliario por orden de un tribunal.

37. Con respecto al período que pasaron en detención policial o en un centro de detención temporal, la fuente sostiene que la única razón que motivó los registros, detenciones y privaciones de libertad por parte de la policía fue que los autores practicaban su fe como testigos de Jehová, entre otras cosas reuniéndose pacíficamente para celebrar cultos, lo que constituye una actividad legítima protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

38. Con respecto al período de prisión preventiva o arresto domiciliario, la fuente sostiene que los tribunales nacionales no se remitieron a ningún indicio razonable de la presunta comisión de un delito por los autores. La única razón de la prisión preventiva o el arresto domiciliario fue el hecho de ser testigos de Jehová y seguir reuniéndose con sus correligionarios para leer y estudiar la biblia, en el ejercicio de unos derechos plenamente amparados por el Pacto. La fuente sostiene, además, que el Comité de Derechos Humanos ha establecido que la prisión preventiva debe ser la excepción y la fianza debe ser concedida, salvo en situaciones en que haya posibilidades de que el acusado pueda esconderse o destruir pruebas, influir en los testigos o huir de la jurisdicción del Estado parte⁴. La fuente alega, además, que el Estado debe presentar pruebas que demuestren que la prisión preventiva es necesaria, y se remite a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, según la cual la mera conjetura no justifica una excepción a la regla establecida en el artículo 9, párrafo 3 del Pacto⁵. En el caso que nos ocupa, la fuente sostiene que el Estado no ha aportado ninguna prueba que demuestre que la privación de libertad, en cualquiera de sus formas, fuera necesaria. Por consiguiente, la fuente concluye que, en el caso de las 18 personas, ha habido una vulneración del artículo 9, párrafos 1 y 3, del Pacto.

ii) Vulneraciones del artículo 17 del Pacto

39. La fuente sostiene que el hecho de que la policía contara con una orden judicial que autorizaba algunos de los registros no convierte en legales unas operaciones que, considerando todos los demás aspectos, no lo son. Se remite al Comité de Derechos Humanos, que ha establecido que el término “ilegal” significa que no puede producirse injerencia alguna, salvo en los casos previstos por la ley. La injerencia autorizada por los Estados solo puede tener lugar en virtud de la ley, que a su vez debe ajustarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto⁶.

40. La fuente sostiene, asimismo, que el registro de los domicilios de los autores y la incautación de sus bienes personales tuvieron como base una investigación penal presuntamente defectuosa y discriminatoria, en la que se afirmaba que era ilegal que los testigos de Jehová se reunieran para celebrar cultos y practicar su fe en ejercicio del derecho a la libertad de religión y la libertad de asociación, amparado por el Pacto. La fuente añade que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que es innegable que el estudio y los debates colectivos de textos religiosos que llevan a cabo los miembros del grupo religioso de los testigos de Jehová es una forma reconocida de manifestar su religión mediante el culto y las enseñanzas, amparada por el artículo 9 del Convenio para la

⁴ CCPR/C/59/D/526/1993, párr. 12.3.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, párr. 3.

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos)⁷.

41. La fuente concluye que los presuntos registros realizados por la policía de los autores y de sus domicilios y la incautación de sus bienes personales, incluidas publicaciones religiosas, fueron arbitrarios, ilegales y contrarios al artículo 17, párrafos 1 y 2, del Pacto.

iii) Vulneraciones del artículo 18 del Pacto

42. La fuente sostiene que el Comité de Derechos Humanos ha explicado que el derecho a la libertad de religión incluye la libertad de preparar y distribuir textos o publicaciones religiosos⁸, y que la libertad de expresión abarca las campañas puerta a puerta, la discusión sobre derechos humanos, el periodismo, la expresión cultural y artística, la enseñanza y el pensamiento religioso⁹. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de religión protege la lectura de los textos sagrados, y que es innegable que el estudio y los debates en grupo de textos religiosos que llevan a cabo los testigos de Jehová es una forma reconocida de manifestación de su religión mediante el culto y las enseñanzas¹⁰.

43. La fuente sostiene que la decisión de detener a los autores y decretar su prisión preventiva o arresto domiciliario en razón de sus creencias y prácticas religiosas en tanto que testigos de Jehová constituye una vulneración de los derechos que los asisten en virtud del artículo 18, párrafo 1, del Pacto. Añade que dicha vulneración no puede justificarse en este caso, y se remite a la observación general núm. 22 (1993) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y a la jurisprudencia conexa¹¹.

44. La fuente alega que la actividad religiosa pacífica de los autores no es en absoluto un delito, que está protegida por el artículo 18 del Pacto y que ninguna de las actividades realizadas por ellos o por sus correligionarios pueden calificarse legítimamente de “extremistas”. Según la fuente, tanto la biblia como las publicaciones y servicios religiosos de los testigos de Jehová son absolutamente pacíficos y en ellos no se hacen llamamientos a la violencia, como tampoco se incita al odio religioso ni se hacen declaraciones “gratuitamente ofensivas”¹².

45. La fuente sostiene además que las autoridades estatales justificaron sus decisiones limitándose a afirmar que la decisión de disolución de 20 de abril de 2017 prohibía todas las actividades religiosas de los testigos de Jehová en toda la Federación de Rusia, incluidas las congregaciones (“grupos religiosos”, según figuraba en los artículos 6 y 7 de la Ley de Religiones). No obstante, la fuente afirma que la decisión de disolución es, en sí misma, contraria a los principios fundamentales protegidos por el Pacto, como los derechos a la libertad de religión y la libertad de asociación. Según la fuente, aun en el caso de que la decisión de disolución fuera legal, las autoridades estatales habrían igualmente vulnerado la libertad de religión de los autores, ya que la decisión de disolución no tiene por objeto prohibir la actividad de los grupos religiosos, que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Religiones, incluye el derecho a reunirse con los correligionarios para la celebración de cultos. En la decisión de disolución únicamente se ordena la disolución de todas las entidades jurídicas religiosas (artículos 7 y 8 de la Ley de Religiones) de los testigos de Jehová, sin que su finalidad sea prohibir los grupos religiosos (congregaciones) de esa

⁷ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Kuznetsov and Others v. Russia*, demanda núm. 184/02, 11 de enero de 2007, párr. 57.

⁸ CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, párr. 4.

⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 11.

¹⁰ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Kuznetsov and Others v. Russia*, párr. 57.

¹¹ CCPR/C/112/D/2131/2012, párrs. 9.3 a 9.4.

¹² Consejo de Europa, Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, “Report on the relationship between freedom of expression and freedom of religion: the issue of regulation and prosecution of blasphemy, religious insult and incitement to religious hatred”, estudio núm. 406/2006, CDL-AD(2008)026, 23 de octubre de 2008, párrs. 68, 69 y 73.

misma confesión. Por consiguiente, la fuente concluye que se han vulnerado los derechos que asisten a los autores en virtud del artículo 18, párrafos 1 y 3, del Pacto.

iv) Vulneraciones del artículo 7 del Pacto

46. La fuente sostiene que los autores fueron objeto de un trato inhumano o degradante durante la detención (en el curso de la cual se realizaron registros policiales, algunos de ellos al parecer muy violentos), la privación de libertad y el procesamiento. Afirma que esos actos contravienen la prohibición establecida en el artículo 7 del Pacto, cuyas disposiciones tienen por finalidad proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona, y no solamente en relación con los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también con los que causan sufrimiento moral¹³.

v) Vulneraciones del artículo 26 del Pacto

47. La fuente afirma que las actuaciones del Estado estuvieron motivadas por un objetivo discriminatorio: poner fin a la práctica religiosa de los testigos de Jehová en la Federación de Rusia. Los autores fueron objeto, presuntamente, de un trato distinto al que reciben los creyentes de las religiones mayoritarias del país, que pueden asistir a sus cultos libremente, sin verse sometidos a redadas, detenciones, registros domiciliarios y privación de libertad. Según la fuente, los autores sufrieron humillaciones y fueron tratados como terroristas, o considerados extremistas, sin ninguna justificación objetiva o razonable. La única razón que puede explicar esa diferencia de trato es la práctica de creencias religiosas distintas. Además, la fuente sostiene que esa misma diferencia de trato constituyó un incumplimiento por el Estado de su obligación de neutralidad e imparcialidad respecto de las creencias y prácticas religiosas. Por consiguiente, concluye que se vulneraron los derechos que asisten a los autores en virtud del artículo 26 del Pacto.

48. La fuente concluye que la actividad religiosa de los autores era totalmente pacífica y que las detenciones de que fueron objeto vulneran los artículos 2, 7 y 18 del Pacto, son arbitrarias y se inscriben en la categoría II. Concluye también que los tribunales nacionales no adujeron ninguna razón que pudiera justificar la prisión preventiva o el arresto domiciliario de los autores, lo que contraviene los artículos 7 y 9 del Pacto, y que dichas medidas de privación de libertad fueron arbitrarias y se inscriben en la categoría I (y/o en la categoría III). Además, concluye que los autores no cometieron ningún delito y que son víctimas de la persecución del Estado en razón de sus creencias religiosas, por lo que la prisión preventiva y el arresto domiciliario fueron discriminatorios, en vulneración de los artículos 2, 7 y 26 del Pacto, y arbitrarios, y se inscriben en la categoría V.

49. A la vista de todo lo expuesto, la fuente solicita que se anulen las condenas impuestas a los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin y Magliv, y que se ponga fin a las actuaciones penales contra los demás autores y sean puestos de inmediato en libertad dejando sin efecto la prisión preventiva y el arresto domiciliario decretados. La fuente solicita asimismo que se conceda a todos los autores el derecho jurídicamente exigible a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

Información adicional de la fuente

50. El 30 de abril de 2020 se informó al Grupo de Trabajo de que, el 25 de marzo de 2020, el Tribunal Regional de Penza había revocado las decisiones del tribunal de primera instancia en relación con los Sres. Kulyasov, Timoshin y Magliv y había devuelto las causas para la celebración de un nuevo juicio.

Respuesta del Gobierno

51. El 3 de enero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que, a más tardar el 3 de marzo de 2020, facilitara información

¹³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 20 (1992), relativa a la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, párrs. 2 y 5.

detallada sobre la situación en que se encontraban los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin, y que aclarara cuáles eran las disposiciones legales que justificaban que siguieran privados de libertad, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones contraídas por la Federación de Rusia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, con los tratados ratificados por el Estado. Asimismo, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de la Federación de Rusia a que velara por la integridad física y psíquica de todos ellos.

52. El 31 de enero de 2020, de conformidad con el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, el Gobierno solicitó una prórroga del plazo para responder, que se le concedió el 3 de febrero de 2020, fijándose como nueva fecha límite el 3 de abril de 2020. El Grupo de Trabajo recibió una respuesta del Gobierno el 20 de abril de 2020, es decir, con posterioridad a la nueva fecha límite. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede aceptar la respuesta como si se hubiera presentado dentro de plazo.

Deliberaciones

53. Al no haber recibido una respuesta del Gobierno dentro del plazo establecido, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

54. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no rebatir en el plazo establecido las alegaciones, en principio fidedignas, de la fuente. Por consiguiente, de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo examinará el caso con toda la información de que disponga.

55. Antes de entrar en el fondo de las alegaciones formuladas por la fuente, el Grupo de Trabajo examinará una cuestión preliminar.

56. El Grupo de Trabajo observa que, según la fuente, los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Bondarchuk y Yavushkin no están en un centro de privación de libertad. De hecho, a los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin y Magliv se les han impuesto penas no privativas de libertad, mientras que los Sres. Bondarchuk y Yavushkin siguen en arresto domiciliario. La fuente ha afirmado que estos arrestos domiciliarios han acarreado graves restricciones, pero no ha facilitado detalles sobre las medidas y restricciones concretas impuestas.

57. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo siempre ha sostenido que el arresto domiciliario equivale a una privación de libertad si se lleva a cabo en locales cerrados de los que la persona no está autorizada a salir¹⁴. Para determinar esta circunstancia, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta si la persona está limitada en sus movimientos físicos, en la posibilidad de recibir visitas y en el uso de diversos medios de comunicación, así como el nivel de seguridad que existe en torno al lugar en el que se supone que la persona está privada de libertad¹⁵. Así pues, corresponde al Grupo de Trabajo examinar cada supuesto de presunta privación de libertad teniendo en cuenta las circunstancias individuales de ese caso¹⁶. Por consiguiente, al observar que no dispone de información suficiente acerca de las

¹⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 13/2007 y 37/2018; véase también la Deliberación núm. 1 sobre el arresto domiciliario, E/CN.4/1993/24.

¹⁵ Véase la opinión núm. 16/2011, en la que el Grupo de Trabajo concluyó que el arresto domiciliario equivalía a una privación de libertad, y compárese con la opinión núm. 37/2018, en la que concluyó que las condiciones del arresto domiciliario no equivalían a una privación de libertad. Véanse también las opiniones núms. 21/1992, 41/1993, 4/2001, 11/2001, 11/2005, 18/2005, 47/2006, 12/2010, 30/2012 y 39/2013.

¹⁶ Deliberación núm. 1 sobre el arresto domiciliario, que figura en E/CN.4/1993/24.

condiciones que conllevan los arrestos domiciliarios de esas personas, el Grupo de Trabajo no puede llegar a una conclusión de si estos equivalen a una privación de libertad.

58. No obstante, el Grupo de Trabajo observa que todas esas personas, al igual que otras mencionadas en la comunicación presentada por la fuente, han sido presuntamente detenidas por el único motivo de ser testigos de Jehová, hecho que no ha sido rebatido por el Gobierno en su respuesta presentada con retraso. A los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin y Magliv se les han impuesto condenas condicionales, lo que implica, por un lado, que pueden ser encarcelados si incumplen las condiciones fijadas en dichas condenas y, por otro, que tienen antecedentes penales en los que figuran como condenados. El Grupo de Trabajo considera también que el presente caso plantea una cuestión grave, ya que hace referencia a las repercusiones de la disolución de los testigos de Jehová como entidad jurídica en la Federación de Rusia. Por consiguiente, y de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, en el que se reserva el derecho de decidir, caso por caso, si la privación de libertad es arbitraria o no, a pesar de la puesta en libertad de la persona interesada, el Grupo de Trabajo procederá a examinar la comunicación.

59. La fuente sostiene que la detención y la privación de libertad de las 18 personas mencionadas en la comunicación se inscriben en las categorías I, II, III y V del Grupo de Trabajo. El Gobierno, aun teniendo la oportunidad de hacerlo, ha optado por no responder oportunamente a esas alegaciones. El Grupo de Trabajo examinará cada una de ellas por separado.

Categoría I

60. En primer lugar, el Grupo de Trabajo observa que la fuente no ha afirmado que la detención de las 18 personas mencionadas en la comunicación se llevara a cabo sin una orden judicial. La fuente ha señalado que algunos de los registros realizados en los domicilios de esas personas se hicieron con autorización judicial, pero no ha especificado cuáles no contaban con ella (véase el párr. 39). También ha indicado que, tras la detención, las 18 personas comparecieron ante un juez, y el Grupo de Trabajo observa que, según la fuente, en todos los casos se produjo dicha comparecencia en un plazo de 48 horas desde la detención. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no está en posición de formular más observaciones sobre la legalidad de las detenciones y registros iniciales, y señala que examinará más adelante si estos se inscriben en la categoría II (véanse los párr. 67 a 73).

61. La fuente ha afirmado que los Sres. Shalev, Korolev, Malkov, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik y las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva estuvieron en prisión preventiva, alegación que el Gobierno ha optado por no rebatir.

62. El Grupo de Trabajo recuerda que es una norma bien establecida del derecho internacional que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, y que debe ser ordenada por el período más breve posible¹⁷. El artículo 9, párrafo 3 del Pacto señala que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. De ahí que la libertad se reconozca como principio y su privación, como excepción en aras de la justicia¹⁸.

63. Las disposiciones enunciadas en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto pueden resumirse de la siguiente manera: toda medida de privación de libertad debe ser excepcional y de corta duración, y la puesta en libertad puede ir acompañada de medidas destinadas únicamente a asegurar la comparecencia del imputado en el proceso judicial¹⁹. El Grupo de Trabajo también desea remitirse al párrafo 38 de la observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la libertad y la seguridad personales, en la que se

¹⁷ Véanse las opiniones núms. 28/2014, 49/2014 y 57/2014. Véase también A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58; A/HRC/30/19; CCPR/C/107/D/1787/2008; CAT/C/TGO/CO/2, párr. 12; A/HRC/25/60/Add.1, párr. 84; E/CN.4/2004/56, párr. 49; A/HRC/19/57, párr. 48; y CCPR/C/TUR/CO/1, párr. 17.

¹⁸ A/HRC/19/57, párr. 54.

¹⁹ *Ibid.*, párr. 56.

afirma que la prisión preventiva debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria, habida cuenta de todas las circunstancias.

64. En el caso de los Sres. Shalev, Korolev, Malkov, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik y las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha optado por no explicar las razones que llevaron a mantenerlos en prisión preventiva. El Gobierno también ha optado por no responder a las alegaciones formuladas por la fuente según las cuales, al decretar y posteriormente prorrogar dicha medida, los tribunales competentes no adujeron ninguna razón que la justificara. Ha optado asimismo por no rebatir las afirmaciones de la fuente de que los tribunales también desestimaron de forma sumaria los recursos interpuestos contra la prórroga de la prisión preventiva de esas personas.

65. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo acepta los argumentos expuestos por la fuente y concluye que la prisión preventiva a los Sres. Shalev, Korolev, Malkov, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik y las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, sin la aportación de razón alguna que la justificara, así como el hecho de que los tribunales desestimaran sumariamente los recursos interpuestos contra la prórroga de esa medida, constituyen vulneraciones del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Además, el Grupo de Trabajo, tomando nota de sus conclusiones en relación con la categoría II, considera asimismo que la prisión preventiva de esas personas fue excesivamente larga.

66. Así pues, el Grupo de Trabajo considera que la prisión preventiva de los Sres. Shalev, Korolev, Malkov, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, y de las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, careció de fundamento jurídico, puesto que los tribunales competentes no cumplieron con el requisito básico para decretarla. En consecuencia, dicha prisión preventiva se inscribe en la categoría I.

Categoría II

67. La fuente sostiene que las 18 personas mencionadas en la comunicación fueron detenidas y privadas de libertad en diferentes fechas y distintas ciudades de la Federación de Rusia por el mero hecho de practicar pacíficamente sus creencias religiosas. Las razones subyacentes de las detenciones son el hecho de que esas personas tuvieran en su poder textos religiosos y biblias, celebraran reuniones con sus correligionarios, recaudaran dinero para actividades de los testigos de Jehová y celebraran cultos. Según la fuente, al hacerlo ejercían sus derechos a la libertad de religión y la libertad de expresión, garantizados en los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto. Se informó al Grupo de Trabajo de que, el 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia resolvió disolver la organización de los testigos de Jehová y sus filiales regionales en el país por sus actividades extremistas. Según el Gobierno, dado que las 18 personas mencionadas en la comunicación habían proseguido con la labor de una organización presuntamente extremista y organizado sus actividades en varias ciudades del país, esas personas habían cometido un delito por el que habían sido enjuiciadas con arreglo a la legislación nacional.

68. El Grupo de Trabajo observa que el artículo 18, párrafo 1, del Pacto establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y que ese derecho incluye la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Puesto que dicho derecho se reconoce a todas las personas, no cabe duda de que abarca las prácticas y manifestaciones religiosas de los testigos de Jehová²⁰ e incluye también el derecho a reunirse para celebrar cultos²¹.

69. En el párrafo 4 de su observación general núm. 22 (1993), relativa a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el Comité de Derechos Humanos explica que la libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza abarca una amplia gama de actividades. El concepto de

²⁰ Véanse las opiniones núms. 40/2018, 69/2018, 11/2019 y 34/2019.

²¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 22 (1993), relativa a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, párr. 4.

culto se extiende a la construcción de lugares de culto. Además, la práctica y la enseñanza de la religión o de las creencias incluyen actos que son parte integrante de la forma en que los grupos religiosos llevan a cabo sus actividades fundamentales, como ocurre con la libertad de escoger a sus dirigentes religiosos, sacerdotes y maestros, la libertad de establecer seminarios o escuelas religiosas y la libertad de preparar y distribuir textos o publicaciones religiosos.

70. El Grupo de Trabajo recuerda que el derecho de profesar o adoptar una religión o creencia es un derecho absoluto sobre el cual no puede imponerse ninguna limitación y que no puede ser objeto de suspensión alguna²². No obstante, la libertad de manifestar la propia religión no es un derecho absoluto y en el artículo 18, párrafo 3, del Pacto se permite restringir dicha libertad con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás, a condición de que tales limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias. Tal como afirma el Comité de Derechos Humanos en el párrafo 8 de su observación general núm. 22 (1993), las limitaciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que dependen.

71. El Grupo de Trabajo es consciente de que la comunicación presentada por la fuente es la tercera que recibe en los últimos 12 meses en relación con los testigos de Jehová en la Federación de Rusia²³. Las 18 personas mencionadas en ella han sido acusadas de realizar “actividades extremistas” de distinta índole, pero, en opinión del Grupo de Trabajo, ninguna de esas actividades puede calificarse como tal. Además, el Grupo de Trabajo no ha tenido ante sí ni ha podido establecer ninguna razón que pueda justificar la limitación de los derechos de esas 18 personas en virtud del artículo 18 del Pacto. El Grupo considera que dichas personas tomaron parte en todas esas actividades en el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión, amparado por el artículo 18 del Pacto. Esas actividades fueron la única razón de su detención y de las actuaciones judiciales emprendidas en su contra.

72. Además, los domicilios particulares de esas 18 personas fueron objeto de registros en los que se requisaron biblias y otros textos religiosos, lo que el Grupo de Trabajo considera otra vulneración de los artículos 17 y 18 del Pacto.

73. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención de los Sres. Solov'yev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin se inscribe en la categoría II. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias para que tome las medidas correspondientes.

Categoría III

74. Teniendo en cuenta su conclusión de que la privación de libertad de las 18 personas a que hace referencia la comunicación es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo desea subrayar que ninguna de esas personas debería haber sido detenida ni ser objeto de prisión preventiva y que ninguna de ellas debería haber sido ni debe ser juzgada. Sin embargo, en el caso de algunas de ellas se decretó la prisión preventiva, en la que siguen estando, otras fueron condenadas y otras se encuentran en arresto domiciliario. Así pues, el Grupo de Trabajo procederá a examinar esas alegaciones y observa que el Gobierno ha optado por no rebatirlas en el plazo fijado para ello.

75. Además, la fuente ha afirmado que se mantuvo a las Sras. Shamsheva y Silayeva en jaulas en la sala de audiencias durante las vistas relativas a la prórroga de su prisión preventiva, afirmación que el Gobierno ha optado por no rebatir en el plazo oportuno. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que, en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto, se reconoce que toda persona acusada de un delito tendrá derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. En ese sentido, el Grupo

²² *Ibid.*, párr. 3; véase también la opinión núm. 69/2018.

²³ Véanse las opiniones núms. 11/2019 y 34/2019.

de Trabajo recuerda el párrafo 30 de la observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, en el que el Comité establece que normalmente los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos. El Grupo de Trabajo considera que este hecho constituye una vulneración del principio de presunción de inocencia y que vulnera el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

76. Asimismo, el Grupo de Trabajo observa que la detención inicial de cada una de las 18 personas se llevó a cabo con una fuerza extraordinaria. A pesar de que en ningún momento se ha indicado que ninguna de ellas se resistiera a la detención o actuara de forma violenta, todas las detenciones se realizaron con gran número de agentes de policía y haciendo uso de la fuerza (véanse los párrs. 9, 15, 20, 25, 28, 31 y 34). El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha optado por no rebatir estas alegaciones, ni siquiera en la respuesta enviada fuera de plazo. Considera también que no había motivos que justificaran tal actuación de la policía y que esta se llevó a cabo con el fin de intimidar a las 18 personas afectadas, lo que constituye una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto. Por consiguiente, concluye que la detención de cada una de esas 18 personas fue arbitraria y se inscribe en la categoría III del Grupo de Trabajo.

Categoría V

77. La fuente afirma, además, que las autoridades del Estado decidieron enjuiciar a las 18 personas por el mero hecho de ser testigos de Jehová, y que tanto su detención como las actuaciones judiciales emprendidas contra ellas se basaron claramente en la decisión de disolución del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2017, por la que se prohíben las actividades religiosas de los testigos de Jehová. Por tanto, la fuente sostiene que la detención y privación de libertad de todas ellas se inscribe en la categoría V. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno ha optado por no rebatir estas alegaciones.

78. El Grupo de Trabajo recuerda que, recientemente, ha examinado dos comunicaciones muy similares relativas a la Federación de Rusia²⁴. También observa que, desde 2015, ha habido múltiples acciones conjuntas de titulares de mandatos de procedimientos especiales en las que se ha expresado preocupación por la prohibición de las actividades religiosas de los testigos de Jehová en la Federación de Rusia²⁵, por las modificaciones introducidas en la Ley Yarovaya, con restricciones a las manifestaciones y las actividades religiosas, y por las vulneraciones de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica y de asociación de los testigos de Jehová en la Federación de Rusia²⁶. El Grupo de Trabajo querría destacar específicamente el llamamiento conjunto más reciente, en el que titulares de mandatos de los procedimientos especiales expresaron inquietud por la cuestión de la persecución sistémica e institucionalizada de los testigos de Jehová²⁷.

79. El Grupo de Trabajo también tiene presente que, el 14 de mayo de 2018, tuvo lugar el examen periódico universal de la Federación de Rusia. Entre las recomendaciones que se formularon al país figuraban varias dirigidas a que se abstuviera de proscribir a grupos religiosos, como los testigos de Jehová, calificándolos de “extremistas”²⁸.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Véanse las comunicaciones AL RUS 6/2015, de 11 de noviembre de 2015; AL RUS 2/2017, de 23 de marzo de 2017; AL RUS 19/2018, de 14 de septiembre de 2018; y AL RUS 22/2018, de 20 de diciembre de 2018. Pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/>.

²⁶ *Ibid.* Véase también la comunicación AL RUS 7/2016, de 28 de julio de 2016. Puede consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/>.

²⁷ Véase la comunicación AL RUS 22/2018.

²⁸ A/HRC/39/13, recomendaciones 147.199 a 147.204.

80. Como ya se ha dicho, las actividades de las 18 personas a que se refiere la comunicación han sido pacíficas y no hay pruebas de que ninguna de ellas haya realizado actos violentos o incitado a otros a realizarlos. El Grupo de Trabajo observa que esas personas son solo algunas del número cada vez mayor de miembros de los testigos de Jehová en la Federación de Rusia que han sido detenidos, privados de libertad y acusados de actividades delictivas por el mero hecho de ejercer la libertad de religión, un derecho amparado por el artículo 18 del Pacto. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y privación de libertad de los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin fueron discriminatorias y se inscriben en la categoría V.

81. El Grupo de Trabajo observa que, aunque este es el tercer caso relativo a la situación de los testigos de Jehová en la Federación de Rusia que examina mediante su procedimiento ordinario de comunicaciones, el propio Grupo de Trabajo y otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales han señalado otros muchos casos similares a través del procedimiento de solicitud conjunta de medidas urgentes (véase el párr. 78). Todos ellos hacían referencia a la calificación de las actividades religiosas pacíficas de los testigos de Jehová como “actividades extremistas”, lo que ha dado lugar a la detención y la privación de libertad de personas pertenecientes a dicho grupo religioso. Por tanto, si bien la presente opinión se refiere a las circunstancias particulares de las 18 personas mencionadas en la comunicación, el Grupo de Trabajo subraya que las conclusiones que figuran en ella son de aplicación a todas las demás personas que se hallen en una situación similar.

Decisión

82. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

a) La privación de libertad de Valeriy Shalev, Ruslan Korolev, Viktor Malkov, Vyacheslav Osipov, Valeriy Rogozin, Igor Egozaryan, Sergey Melnik, Valentina Vladimirova, Tatyana Galkevich, Tatyana Shamsheva y Olga Silayeva es arbitraria, por cuanto contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría I;

b) La privación de libertad de Aleksandr Solovyev, Vladimir Kulyasov, Denis Tismoshin, Andrey Magliv, Valeriy Shalev, Ruslan Korolev, Viktor Malkov, Yevgeniy Dechko, Vyacheslav Osipov, Valeriy Rogozin, Igor Egozaryan, Sergey Melnik, Valentina Vladimirova, Tatyana Galkevich, Tatyana Shamsheva, Olga Silayeva, Aleksandr Bondarchuk y Sergey Yavushkin es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 9 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 14, párrafo 2, 17, 18 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II, III y V.

83. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la Federación de Rusia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin sin dilación y ajustarla a las normas internacionales pertinentes, incluidas las recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

84. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad a los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que constituye en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para asegurar la puesta en libertad inmediata de

esas personas. El Grupo de Trabajo considera también que el remedio adecuado para los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin y Magliv es ponerlos en libertad de manera incondicional, suprimir sus antecedentes penales y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

85. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin, y a que adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la vulneración de sus derechos.

86. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias para que tome las medidas correspondientes.

87. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

88. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se ha puesto en libertad a los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin y, de ser así, en qué fecha;

b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin;

c) Si se ha investigado la vulneración de los derechos de los Sres. Solovyev, Kulyasov, Timoshin, Magliv, Shalev, Korolev, Malkov, Dechko, Osipov, Rogozin, Egozaryan y Melnik, las Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva, y los Sres. Bondarchuk y Yavushkin y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la Federación de Rusia con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

89. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

90. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

91. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁹.

[Aprobada el 1 de mayo de 2020]

²⁹ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.